



Juzgado Especializado en Responsabilidad  
Administrativa del Tribunal Administrativo  
del Poder Judicial del Estado de Chiapas

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NÚMERO: \*\*\*\*\*

OFICIALÍA DE PARTES

ACTOR: \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*

25 OCT 2022

RECIBIDO  
FIRMA: *[Firma]*

AUTORIDAD DEMANDADA: PRESIDENCIA DEL  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ,  
CHIAPAS.

ASUNTO: SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN.

CIUDADANOS MAGISTRADOS DE LA SALA DE REVISIÓN DEL  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL DEL  
ESTADO DE CHIAPAS.  
TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.

LIC. CARLOS ORSOE MORALES VÁZQUEZ, en mi calidad de **Presidente Municipal**  
**Constitucional del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas**,  
personería que se encuentra acreditada en el expediente administrativo de origen, asimismo  
se reitera en esta instancia el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, así como  
a los profesionistas indicados, acreando para que los oigan y reciban en esta instancia a  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* ante Usted,  
respetuosamente expongo:

Que con fundamento en los artículos 175 fracción I inciso a), 174 y 175 de la Ley de  
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, por este medio, interpongo  
recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva de fecha 04 cuatro de octubre de  
2022 dos mil veintidós, mediante la cual se declaró la nulidad lisa y llana de la resolución  
de fecha 26 veintiséis de junio de 2019 dos mil diecinueve, dictada en el expediente  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* resuelto por el Honorable Ayuntamiento Municipal de  
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y firmado por el Presidente Municipal.

#### AGRAVIOS.

**PRIMERO.** - La sentencia definitiva de fecha 04 cuatro de octubre de 2022 dos mil  
veintidós, es ilegal ya que vulnera el tercer párrafo del artículo 156 de la Ley de  
Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, y los principios de legalidad y  
seguridad jurídica establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados  
Unidos Mexicanos, porque el primer precepto legal citado dispone lo siguiente:

**Artículo 156.-** Las sentencias se fundarán en derecho y resolverán sobre  
la pretensión del demandante que se deduzca de su demanda, en relación  
con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos  
notorios.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia del  
Juzgado en primera instancia o de la Sala de Revisión en segunda instancia,  
deberá examinar primero aquellas que puedan llevar a declarar la nulidad  
lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una  
resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes,  
o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma  
afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la  
resolución.



El Juzgado o la Sala de Revisión conforme a su competencia, podrán corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación."

El precepto legal citado dispone que el juzgador al emitir la sentencia debe realizar un estudio y pronunciamiento respecto de los argumentos jurídicos expresados por las partes, sin embargo, el Juez Especializado en Responsabilidad Administrativa en la sentencia que se impugna, nada dijo de los argumentos de defensa expresados en la contestación de demanda, lo anterior cobra relevancia ya que de haberlo hecho, hubiera concluido que en la especie no se actualiza la figura de la prescripción de la autoridad para emitir la resolución impugnada, contrario a lo que resolvió.

En el caso, en la sentencia de fecha 04 cuatro de octubre de 2022 dos mil veintidós, específicamente en el Considerando III, el Juzgado determinó lo siguiente:

"III. El artículo 156, segundo párrafo, de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, dispone que, en las sentencias, cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, deberá examinarse en primer lugar, aquellas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada. Esta porción normativa conduce a este órgano jurisdiccional a analizar en segundo concepto de nulidad; aquel en el que el accionante alega que debe proceder a nulidad lisa y llana de la resolución impugnada por que, Al momento de su emisión, ya había prescrito a la facultad sancionadora de la autoridad responsable.

Se procede entonces al estudio del segundo concepto de agravio. En este el impetrante argumenta, en resumen, que en el marco de lo dispuesto en el artículo 75, fracciones I y II de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, la facultad sancionadora de la autoridad demandada ya estaba prescrita al momento de dictar la resolución el día 26 de junio del 2019, en el procedimiento administrativo

\*\*\*\*\*

Pone de relieve que la autoridad demandada expuso en la resolución que la conducta que le reprocha no generó un daño o perjuicio al Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque la omisión en que incurrió no es estimable en dinero.

Precisa que, al estimarlo así la propia autoridad demandada, la infracción que se le imputa como presunto responsable se ubica en las fracciones I y II del numeral mencionado, porque al haber causado baja el 30 de septiembre del 2015 y haberse dictado la resolución el 26 de junio del 2019, la que le fue notificada hasta el 27 de noviembre de ese año, los plazos con que contaba su contraparte para sancionarlo, contenidos en las fracciones I y II del artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, fueron superados.

Los conceptos de la unidad que se analizan son fundados, en mérito de las siguientes consideraciones:

La aplicación de las sanciones es una facultad que extingue cuando se actualiza la prescripción de ejercerla prevista en la Ley.

La figura jurídica de la prescripción representa una autolimitación que el propio Estado se impone para el ejercicio de la función sancionadora que tiene encomendada, debido a que dicha atribución de la autoridad también representa una garantía a favor del servicio público, pues con la existencia de la prescripción subsiste la posibilidad de que este no sea infraccionado una vez que transcurrió el plazo previsto en la Ley, al desaparecer el derecho del Estado para perseguir y sancionar una conducta específica y determinada y, además, procede declararla oficiosamente y no se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, entre las cuales se encuentra la vigencia y la oportunidad de su iniciación y trámite porque se vulneran





los derechos humanos de la persona sujeta a investigación, lo que lo hace una figura procesal de estudio preferente y oficioso.

Ahora bien, la resolución impugnada hace prueba plena en términos del artículo 153, fracción I, de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, por contener hechos legalmente afirmados por la propia autoridad demandada y es útil para sostener que se acredita, por así reconocerlo el disidente en su escrito de expresión de agravios, que la irregularidad que se le imputan como presunto responsable es no haber formalizado el acta de entrega-recepción y forma teoría del proceso de entrega de los asuntos correspondientes a la secretaría de Obras Públicas municipales dentro del término previsto en el artículo 45, fracción III, de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para el Estado de Chiapas.

Es útil también para establecer que el 10 de octubre del 2013 el disconforme fue dado de alta como titular de la Secretaría y qué causó baja el 30 de septiembre del 2015.

Asimismo, también prueba que la autoridad demandada, en el apartado del rubro "VII.- el monto de beneficio, daño o perjuicio económico derivado del incumplimiento de obligaciones" señaló literalmente:

"De las constancias procesales se desprende que la conducta que se reprocha no ha generado un daño o perjuicio al H. Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; pues con la omisión en que incurrió el servidor público sujeta a procedimiento no es estimable en dinero."

Lo expuesto permite sostener lo siguiente:

En términos del artículo 45, fracción III, segundo párrafo, de la abrogada Ley de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, vigente en la época de los hechos, el presunto responsable \*\*\*\*\* al haber causado baja el 30 de septiembre del 2015, dejó de realizar la entrega de los recursos materiales, financieros y humanos, que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones hasta 15 días después de haberse separado o asumido un empleo, cargo o comisión; esto es, hasta el 15 de noviembre de ese año. Para robustecer esto se transcribe la pronunciación normativa.

"Artículo 45..."

En consecuencia, al establecer el artículo 75, en sus fracciones I y II, de esa Ley, que las facultades del Superior Jerárquico y de la Secretaría de la Función Pública para imponer las sanciones prescribirán en un año si el beneficio obtenido o del daño causado por el infractor no excede de 10 veces el salario mínimo mensual vigente en el Estado y que en los demás casos prescribirán en 3 años. Al reconocer la propia autoridad demandada que la conducta que le reprocha al presunto infractor no generó un daño o perjuicio al ayuntamiento municipal de Tuxtla Gutiérrez Chiapas, porque la omisión en que incurrió no es estimable en dinero; se arriba a la conclusión que, al no haber hecho el actor la entrega de los recursos materiales, financieros y humanos, que le fueron asignados para el desempeño de sus funciones hasta el 15 de noviembre del 2015 (plazo que tuvo para hacerlo en término del artículo 45, fracción III, segundo párrafo de la Ley que se Comenta) el plazo de 3 años con qué contó la autoridad demandada para sancionar feneció el 15 de noviembre del 2018. Por lo tanto, al momento en que la sentencia administrativa impugnada fue notificada al actor: el 27 de noviembre del 2019, la Facultad sancionadora de la autoridad ya había prescrito.

Cabe hacer notar, que se toma como referencia la fecha de la notificación de la resolución administrativa impugnada (27 de noviembre del 2019) porque es hasta ese momento, no en la fecha de su emisión, que lo decidido en ella causó efectos en la esfera jurídica del inconforme; tan es así, que a partir de que le fue notificada, pudo impetrar su nulidad al conocer sus motivos y fundamentos.

Al caso es aplicable la tesis XX.2°17 A sustentada en la Novena Época por el segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, registro digital 180831; Tomo XX, Agosto de 2004; página 1647; publicada en el semanario judicial de la Federación y su Gaceta, en los términos siguientes:...



TESIS....

Tomando en cuenta que el concepto de nulidad analizado deviene fundado y suficiente para desgarrar la nulidad lisa y llana de la resolución administrativa impugnada, se dejan de atender y dar respuesta a los restantes agravios, porque a ningún fin práctico conduciría, puesto que el resultado que persiguen todos, es el conseguido con lo alegado en el segundo.

Resulta aplicable, por analogía sustancial, la jurisprudencia P./J.100/99 S, sustentada en la novena época por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo X, septiembre de 1999; página 705, registro digital 193258; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con la redacción siguiente:

**"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ESTUDIO INNECESARIO DE CONCEPTOS DE INVALIDEZ..."**

Congruente con lo expuesto, con fundamento en el artículo 159, fracción II, de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, se declarará la nulidad lisa y llana de la resolución pronunciada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve por el presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el procedimiento administrativo \*\*\*\*\* que lo inhabilitó temporalmente para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público municipal por un lapso de tres años.

Por lo expuesto y fundado, este Juzgado Especializado en Responsabilidad Administrativa:

**RESUELVE**

Primero: Por los motivos y fundamentos expuestos en el Considerando III (tres) se declara la nulidad lisa y llana de la resolución pronunciada el veintiséis de junio de dos mil diecinueve por el presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el procedimiento administrativo \*\*\*\*\* que lo inhabilitó temporalmente para desempeñar empleos, cargo o comisiones en el servicio público municipal por un lapso de tres años.  
..."

De la transcripción anterior, se advierte que el Juzgador señaló que el segundo concepto de nulidad expresado por el demandante, era fundado en consecuencia, determinó ya haber prescrito la facultad sancionadora del Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, sin tomar en cuenta los argumentos jurídicos de defensa expresados por esta autoridad en la contestación de demanda, lo cual contraviene lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 156 de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Chiapas.

Ahora bien, para dirimir el fondo de la cuestión jurídica planteada que consiste en establecer si en el caso, se actualizó la figura de la prescripción, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, el cual dispone lo siguiente:

**"ARTÍCULO 75.- LAS FACULTADES DEL SUPERIOR JERÁRQUICO Y DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA PARA IMPONER LAS SANCIONES QUE ESTA LEY PREVÉ, SE SUJETARÁN A LO SIGUIENTE:**

I. PRESCRIBIRÁN EN UN AÑO SI EL BENEFICIO OBTENIDO O EL DAÑO CAUSADO POR EL INFRACTOR NO EXCEDE DE DIEZ VECES EL SALARIO MÍNIMO MENSUAL VIGENTE EN EL ESTADO; Y

II. EN LOS DEMÁS CASOS PRESCRIBIRÁN EN TRES AÑOS.

EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN SE CONTARÁ A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN LA RESPONSABILIDAD O A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE HUBIERE CESADO, SI FUESE DE CARÁCTER CONTINUO.





EN TODOS LOS CASOS LA PRESCRIPCIÓN A QUE ALUDE ESTE PRECEPTO SE INTERRUMPIRÁ AL INICIARSE EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 62."

El precepto legal citado dispone que las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría de la Función Pública para imponer sanciones que Ley en cita prevé, se deben observar los plazos siguientes: 1º Prescriben en un año los casos en que el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no exceda de diez veces el Salario Mínimo Mensual Vigente en el Estado, y 2º, en los demás casos prescriben en tres años.

También dispone el numeral en cita que el plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que hubiese incurrido en la responsabilidad o partir del instante en que hubiere cesado, si fue de carácter continuo, y precisa que en todos los casos la prescripción se interrumpe al iniciarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 62<sup>1</sup>, del ordenamiento legal en comento, es decir, a partir de la notificación del citatorio para la audiencia de ley.

Como puede apreciarse en este texto, el legislador previó la posibilidad de cortar la continuidad del transcurso del tiempo en el ejercicio de la facultad sancionadora, al considerar que éste se interrumpía con el inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad.

Una primera reflexión de este texto legislativo, puede llevarnos a considerar que con la interrupción el tiempo que venía transcurriendo quedó paralizado al haberse cortado su continuidad, de manera que el tiempo transcurrido permanece y una vez que se inicie el procedimiento administrativo, retomará su curso a efecto de que la prescripción finalmente pueda constituirse.

Esta posición, sin embargo, no parece ser la más idónea, toda vez que si ello fuera así el procedimiento administrativo de responsabilidad se vería transformado en una secuela de actuaciones utilizadas para justificar que el plazo interrumpido no vuelva a tomar su curso, evitándose así la prescripción.

Por ese motivo, la interrupción establecida por el legislador tiene un gran significado para el ejercicio de las facultades sancionadoras. Una vez iniciado el procedimiento administrativo de responsabilidad, queda a un lado el tiempo transcurrido que sirvió para que la autoridad hiciera las investigaciones pertinentes y se allegara del mayor número de elementos a fin de acreditar la responsabilidad en que incurrió el servidor público, dando paso a un nuevo tiempo en el cual el servidor público tendrá oportunidad de defenderse y la autoridad administrativa tendrá que acreditar su acusación, toda ello dentro del procedimiento administrativo sancionador. **Entonces, la interrupción del plazo de prescripción al iniciarse el procedimiento administrativo sancionador, deja de lado el tiempo transcurrido y hace que comience nuevamente el plazo de prescripción.**

Lo anterior es así porque la actividad que despliega la autoridad administrativa sancionadora al interrumpir la prescripción es determinante, ya que para dar inicio al procedimiento sancionador debe estar segura de contar con elementos suficientes que hagan presuponer la responsabilidad en que incurrió el servidor público.

<sup>1</sup> ARTÍCULO 62.- LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA IMPONDRÁ LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS A QUE SE REFIERE ESTE CAPÍTULO MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:

1.- CITARÁ AL PRESUNTO RESPONSABLE A UNA AUDIENCIA, HACIENDOLE SABER LA RESPONSABILIDAD O RESPONSABILIDADES QUE SE LE IMPUTEN, EL LUGAR, DÍA Y HORA EN QUE TENDRÁ VERIFICATIVO DICHA AUDIENCIA Y SU DERECHO A OFRECER PRUEBAS Y ALEGAR EN LA MISMA LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, POR SI O POR MEDIO DE UN DEFENSOR.





En estas circunstancias, debe concluirse que **una vez interrumpido el plazo de prescripción con el inicio del procedimiento administrativo por parte de la autoridad sancionadora, el plazo debe empezar a contarse de nueva cuenta, pues fue la autoridad quien lo interrumpió al tener probabilidades de probar la conducta ilícita del servidor público y con base en ello**, es de su conocimiento el procedimiento administrativo sancionador que debe agotar a efecto de imponer una sanción administrativa al servidor público.

No pasa inadvertido que el artículo 75 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chiapas, no prevé expresamente la indicación de que una vez interrumpido el plazo, el mismo vuelve a contabilizarse, sin embargo, a esa conclusión debe llegarse si se considera que la autoridad administrativa está iniciando una etapa procedimental con elementos que le permitirán emitir una resolución en un plazo razonable, sin intentar prolongar el tiempo en que está bajo duda la honorabilidad de un servidor público.

Las anteriores consideraciones jurídicas fueron establecidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la cual derivó la jurisprudencia de observancia obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo cuyo rubro y texto señalan lo siguiente:

**RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. UNA VEZ INTERRUPTO EL PLAZO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD, EL COMPUTO SE INICIA NUEVAMENTE A PARTIR DE QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA CITACIÓN PARA LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.**

De los artículos 78 y 64 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos se concluye que el único acto que interrumpe el plazo de la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad es el inicio del procedimiento administrativo, no las actuaciones siguientes, y que una vez interrumpido, qué debe computarse de nueva cuenta a partir del día siguiente al en que tuvo lugar dicha interrupción con conocimiento del servidor público, lo que acontece con la citación que se le hace para la audiencia, aun cuando en el mencionado artículo 78 no se establece expresamente, puesto que del análisis de las etapas que conforman tal procedimiento se advierte que en caso de que la autoridad sancionadora no cuente con elementos suficientes para resolver, o bien, advierta algunos que impliquen nueva responsabilidad administrativa, podrá disponer la práctica de investigaciones, citándose para otra u otras audiencias, lo que produce que el procedimiento se prolongue, sin plazo fijo, a criterio de la autoridad sancionadora. Esto es, al ser la prescripción una forma de extinción de las facultades de la autoridad administrativa para sancionar a los servidores públicos que realizan conductas ilícitas, por virtud del paso del tiempo, la interrupción producida al iniciarse el procedimiento sancionador mediante la citación a audiencia del servidor público deja sin efectos el tiempo transcurrido, a pesar de no disponerse expresamente el artículo 78 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que fue la misma autoridad sancionadora la que lo interrumpió al pretender probar la conducta ilícita del servidor público y ser de su conocimiento el procedimiento sancionador que debe agotar a efecto de imponerle una sanción administrativa, evitándose con ello el manejo arbitrario de la mencionada interrupción en perjuicio de la dignidad y honorabilidad de un servidor público. En consecuencia, la única actividad procedimental que ofrece certeza en el desenvolvimiento del procedimiento sancionador sin que exista el riesgo de su prolongación indefinida, es la citación para audiencia hecha al servidor público, con que se inicia dicho procedimiento, por lo que a partir de que surte efectos la notificación de la mencionada citación inicia nuevamente el cómputo del plazo de la prescripción interrumpida, sobre todo considerando que si la referencia al inicio del procedimiento sirvió para determinar el momento de interrupción del plazo de prescripción, aquélla puede ser utilizada para establecer el momento a partir del cual se vuelve a computar el citado plazo, sin que esto deje en estado de indefensión a la autoridad sancionadora, toda vez que antes de iniciar el procedimiento sancionador tuvo tiempo para realizar investigaciones y recabar elementos probatorios.





De lo hasta aquí expuesto se advierte que la conclusión plasmada en la sentencia de fecha 04 cuatro de octubre de 2022 dos mil veintidós, es incorrecta, en virtud de que el plazo para que se configurara la prescripción de la facultade sancionadora se interrumpió con la emisión y notificación del oficio citatorio \*\*\*\*\* de fecha 29 de marzo de 2016, por medio del cual el Contralor Municipal citó a la parte actora para la audiencia de ley, mismo que fue notificado el día 08 ocho de abril de 2016 dos mil dieciséis, lo cual constituye el inicio del procedimiento sancionador, de conformidad con lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Chiapas, acto que interrumpe el plazo de la figura de la prescripción, por disposición expresa de lo señalado en el artículo 75 del ordenamiento legal citado.

Por lo tanto, si bien el plazo previsto en el numeral 75 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Chiapas, dispone que el plazo de prescripción es de un año los casos en que el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no exceda de diez veces el Salario Mínimo Mensual Vigente en el Estado, y 2º, en los demás casos prescriben en tres años, plazo que se interrumpe con la notificación del oficio \*\*\*\*\* de fecha 29 de marzo de 2016 dos mil dieciséis, lo cual aconteció el 08 ocho de abril siguiente, entonces a partir de ese momento se interrumpió el plazo el cual debe reiniciarse, por otros tres años más, razón por la cual es incorrecto que el juez resolviera que el plazo feneció el día 18 dieciocho de noviembre de 2018 dieciocho, porque en esa fecha aún no transcurría el plazo de tres años previsto en el numeral 75 de la Ley de Responsabilidades citada, ya que si el plazo inicio el 11 de abril de 2016 al 18 de noviembre de 2018, aún no transcurrían los tres años para considerar que se actualizó la figura de la prescripción de facultades para sancionar.

En consecuencia, es evidente que el Juez de Especializado en Administrativa del Tribunal de Justicia Administrativa del Poder Judicial del Estado de Chiapas, actuó de manera incorrecta, dado que declaró la nulidad de la resolución de 23 veintitrés de junio de 2019 dos mil diecinueve, emitida por el presidente del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el procedimiento administrativo \*\*\*\*\* ello por haber prescrito las facultades sancionatorias de la autoridad, sin embargo, existe un error en las fechas que cita para resolver lo cual es violatorio del principio de congruencia interna que debe regir en toda resolución, conforme al contenido del artículo 156 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, que implica que la decisión no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí.

**SEGUNDO.-** La sentencia definitiva de fecha 04 cuatro de octubre de 2022 dos mil veintidós, es ilegal ya que vulnera el tercer párrafo del artículo 156 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas, y los principios de legalidad y seguridad jurídica establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el primer precepto legal citado dispone lo siguiente:

**"Artículo 156.-** Las sentencias se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del demandante que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia del Juzgado en primera instancia o de la Sala de Revisión en segunda instancia, deberá examinar primero aquellas que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma





afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

El Juzgado o la Sala de Revisión conforme a su competencia, podrán corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

El precepto legal citado dispone que el juzgador al emitir la sentencia debe realizar un estudio y pronunciamiento respecto de los argumentos jurídicos expresados por las partes, sin embargo, el Juez Especializado en Responsabilidad Administrativa en la sentencia que se impugna, omite estudiar y analizar la causal de improcedencia que hizo valer en la contestación de demanda.

En efecto, al contestar la demanda se hizo la causal de improcedencia siguiente:

**"PRIMERO.** - La presente demanda debe desecharse por notoriamente improcedente al actualizarse la hipótesis de la fracción X del artículo 123; en consecuencia, debe sobreseerse en términos del artículo 124 fracción II, ambos preceptos de la multicitada Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas reformado, debiendo ordenarse el archivo del presente asunto, como total y definitivamente concluido.

Aseverando lo anterior, en el sentido de que el hoy demandante no expresa de manera clara y objetiva cuales son los ordenamientos supuestamente violados por la hoy demandada, ni mucho menos manifiesta las razones por las que considera que el actuar de la autoridad violó las normas en perjuicio de su persona, de igual manera omite establecer cuál es el daño que dice resentir a su esfera jurídica el demandante con la resolución que pretende mediante este juicio sea nulificada; limitándose a realizar transcripciones de ordenamientos legales, tesis aisladas y jurisprudenciales sin hacer un razonamiento lógico jurídico de la aplicabilidad al caso concreto que hoy nos ocupa."

Sin embargo, al emitir la sentencia de fecha 04 cuatro de octubre de 2022 dos mil veintidós, el juzgador omitió realizar pronunciamiento alguno en relación a la causa de improcedencia que se planteó en el oficio contestario, lo cual infringe lo dispuesto en el artículo 156 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a ustedes Magistrados de la Sala de Revisión del Tribunal Administrativo del Poder Judicial del Estado de Chiapas, solicito:

**PRIMERO.** - Tenerme por presentado en tiempo y forma con este escrito, interponiendo RECURSO DE REVISION, en contra de la resolución de fecha sentencia de fecha 04 cuatro de octubre de 2022 dos mil veintidós, la cual solicito sea revocada.

**SEGUNDO.** - En su oportunidad y previos los límites de ley, dictar resolución conforme a derecho.



PROTESTO LO NECESARIO

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS: 24 DE OCTUBRE DE 2022.

ENC. CARLOS ORSOF MORALES VÁZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



17 ELEMENTOS ELIMINADOS. Justificación: Este documento constituye una versión pública de su original. En consecuencia, se suprimió toda aquella información considerada legalmente como confidencial por ser vinculable a personas identificadas y/o identificables, asimismo, por encuadrar en los supuestos normativos previstos en la Constitución Política Federal y Local; así como los numerales: 120, 121, 129, fracción III, 139, y 140 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas.

Fecha de clasificación: a 01 de agosto del 2024